



El nuevo ciclo político ► El discurso soberanista

Páginas 2 a 4 <<<

Tras compactar el Gobierno bajándolo de 15 a 12 departamentos, el presidente **Mas** ha anunciado una reducción de 41 de las 177 secretarías y direcciones generales, lo que representa un 23% de reducción de estos altos cargos (que no, desde luego, de la Administración de la Generalitat, como exageraba algún titular *on-line*). El impacto directo agregado de estas medidas sobre el gasto público es poco relevante –unos tres millones de euros–, aunque se ha presentado como la primera etapa de una secuencia que llevará en tres meses a nuevas reducciones de estructura, en niveles jerárquicos inferiores, primero, y en organismos y empresas públicas, más adelante.

Aun así, el paquete en su conjunto se antoja casi simbólico, comparado con la magnitud del déficit presupuestario que, desbordando las estimaciones más pesimistas, podría llegar, según **Mas**, hasta los 7.000

Análisis

Francisco Longo

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICA (ESADE)



El tamaño cuenta, pero no es lo más importante

La Administración pública catalana necesita reformas cualitativas que incluyan incentivos a la eficiencia

millones y el 3,6% del PIB. Con estas previsiones en la mano, el objetivo de consolidación fiscal obligará, previsiblemente, a una cirugía bastante más radical. En los próximos meses, el Gobierno tendrá que reenfocar las prioridades de gasto, revisar algunas políticas a la baja, desinvertir en otras, reformular los estándares de servicio en ciertos casos, eliminar subsidios, introducir copagos, adentrarse, en definitiva, en la

gestión dura de una crisis fiscal de proporciones muy serias, incompatible con la competitividad de nuestra economía.

Escasa efectividad

Ante esas previsiones, gestos de austeridad como los anunciados son, por su carácter ejemplarizante, pasos en la buena dirección. Dicho esto, conviene recordar que el problema de nuestra Administración no es, fundamentalmente, de tamaño, sino de eficacia y productividad. No tenemos más funcionarios, pero puntuamos muy bajo en las estadísticas internacionales sobre efectividad de la Administración. Nuestros funcionarios, retribuidos, en promedio, en la media europea, trabajan bastantes menos horas que en los demás países de la UE. La uniformidad y rigidez de nuestro modelo de empleo público es una causa permanente de ineficiencias en el

sector de la salud, en la enseñanza, en la promoción del empleo, en los servicios sociales, en la ciencia y la universidad. Si nos centramos en el tamaño, corremos el riesgo de quedarnos en la política de gestos, sin afrontar las causas que producen estos resultados.

La Administración pública catalana necesita, sobre todo, reformas cualitativas, cuyo eje debiera ser la introducción, en las estructuras y servicios públicos, de un conjunto de incentivos a la eficiencia de los que, hoy por hoy, carece. Los estudios comparados muestran que esta clase de reformas institucionales suelen llevarse a la práctica en contextos de crisis presupuestaria aguda. El anuncio de estas medidas de reducción invita a elucubrar sobre si el Gobierno recién constituido apostará de verdad por reformar la Administración o se conformará con recortarla un poco. La respuesta no se hará esperar mucho.